

Mientras algunos gobiernos y organizaciones no gubernamentales están trabajando para erradicar el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, otros lo están haciendo para mantener el flujo de mujeres en el mercado global del sexo.

A través de agendas políticas públicas y secretas, hay gobiernos que están financiando ONGs que promueven políticas y legislaciones favorables a la prostitución en los países más pobres del mundo. Estas ONGs subvencionadas con fondos de países occidentales declaran que están protegiendo los derechos de las mujeres, que hablan en nombre de ellas, pero en realidad, están trabajando para legitimizar la prostitución y el flujo transnacional, promoviendo políticas que las perjudican, impidiendo el desarrollo de la sociedad civil y corrompiéndola para el beneficio de los traficantes y proxenetas.

LA CORRUPCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL: MANTENIMIENTO DEL FLUJO DE MUJERES EN EL MERCADO GLOBAL DEL SEXO

Por:
DONNA M. HUGHES
*Programa de Estudio de Mujeres
Universidad de Rhode Island*



El tráfico de mujeres supone 7 billones de dólares al año. Se trata de la esclavitud moderna de hoy en día que incluye el reclutamiento, transporte y retención de millones de mujeres, y tiene su fundamento en la oferta y demanda entre los países emisores y receptores. Los países de destino son aquéllos donde la prostitución está legalizada o tolerada, y existe un escaso número de mujeres que pueden ser reclutadas para cubrir la demanda. Los países de origen son aquéllos

donde los traficantes reclutan fácilmente a mujeres, normalmente porque son pobres, desempleadas, carecen de oportunidades y esperan encontrar trabajo y una vida mejor en el extranjero.

En los países de destino, las estrategias están ideadas para proteger las industrias del sexo, las cuales generan cientos de millones de dólares al año. Los principales beneficiados son los grupos del crimen organizado y funcionarios corruptos, pero en los países donde la prostitución es legal, el estado también recauda mi-

llones de dólares. Para asegurarse de que continúe el flujo de mujeres con fines de explotación sexual a los países de destino, los gobiernos están financiando ONGs en origen con el fin de promover opiniones, políticas y leyes que benefician a los traficantes y proxenetas en los países de destino.

Un país que tiene una política gubernamental favorable a la prostitución es Holanda, que legalizó los burdeles y el proxenetismo en octubre de 2000, adoptando así el papel principal en la normalización de la prostitución



global de las mujeres. Con 2.000 burdeles y numerosos servicios de acompañamiento estimado en 30.000 mujeres, éste es claramente un país de destino. Según un estudio realizado en Holanda, el 79% de las mujeres que se dedica a la prostitución lo hace bajo un cierto grado de fuerza y el 70% no es ciudadana de dicho país ni de ningún otro de la Unión Europea. Como consecuencia, la industria holandesa del sexo depende de que se mantenga el flujo de mujeres extranjeras a sus burdeles, y una de las maneras que tiene de mantenerla es financiando ONGs en lugares diversos de Europa Central y del Este y el Sur y Sudeste de Asia que representen sus intereses.

En el año 2000, en una conferencia antitráfico celebrada en Ucrania, un funcionario de la embajada de Holanda defendió la demanda diciendo que ellos no podían erradicarla, pero sí regularla. Él propuso que dicha demanda fuese normalizada y legalizada concediendo permisos laborales especiales para las ucranianas que de-

cidieran trabajar en los burdeles.

Los Estados Unidos tienen una agenda secreta de gobierno para promover las opiniones y políticas favorables a la prostitución en los países de origen. Aunque representantes oficiales de la administración Bush en varias ocasiones hayan dicho que se oponen a la legalización y que apoyan una posición abolicionista acerca del mercado global del sexo, una facción que la defiende y que además controla muchas de las decisiones que se toman en las agencias de financiación usan su influencia para subvencionar organizaciones favorables a la prostitución en los países de origen.

Por ejemplo, una gran ONG de los Estados Unidos organizó un foro de política anti-tráfico en el año 2000. Las recomendaciones que se publicaron apoyaban un cambio en las leyes de migración para permitir el flujo desde el Europa Central y del Este: “Estas trabajadoras están respondiendo simplemente a la demanda de su trabajo”. En este documento, la

prostitución era redefinida como una forma de trabajo, y un participante recomendó su discriminación. Se dijo que “el trabajo sexual” supone más poder para las mujeres porque les permite emigrar a otros países donde pueden tener mayor independencia económica y autonomía de los hombres”. Esta ONG norteamericana declaró que las opiniones de los participantes invitados no reflejaban necesariamente su posición, pero después recibió varios millones de dólares financiados por el Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo.

La defensa de la prostitución por parte de los Estados Unidos es secreta, y esta posición se niega en público cuando los representantes de ONGs son cuestionados. Por ejemplo, este verano, un representante de otra ONG norteamericana que financia económicamente proyectos de desarrollo para mujeres en Europa Central dijo en una conferencia lo siguiente: “La legalización de la prostitución es un planteamiento



que estamos analizando. Las mujeres no tienen habilidades emprendedoras. Nosotros debemos tener en cuenta todas las alternativas. Es mejor para las mujeres si la prostitución es legal, pues entonces podemos ayudarlas en su sindicalización. Ésta es la realidad". Cuando yo repetí esta declaración, el coordinador de relaciones gubernamentales de la ONG me escribió y me dijo que ni la organización ni su representante "defiende o ha defendido nunca la sindicalización o la legalización".

La razón que tiene Holanda para desarrollar esta política encubierta es bastante transparente: está promoviendo su propia fuente de dinero a través de la explotación sexual de mujeres extranjeras. Pero la razón de los Estados Unidos es menos evidente. De cualquier manera, esta defensa está teniendo efectos devastadores en políticas, legislaciones y sociedad civil de los pueblos más pobres.

La mayoría de personas de países de origen se oponen al flujo de mujeres en el mercado global del sexo hacia los países receptores. Un estudio realizado en Ucrania con casi 1200 mujeres y niñas, con edades comprendidas entre 15 y 35 años, reveló que aunque muchas jóvenes están impacientes por viajar fuera para buscar trabajo, cuando se les pregunta si "la industria del sexo" sería un "trabajo aceptable en el extranjero", ninguna de las mujeres y niñas de este grupo contestó que sí.

Aunque algunas personas pueden sentir compasión por una mujer que esté en la prostitución para alimentar a su familia, éste no se puede considerar un trabajo legítimo. En países como Ucrania, el estigma contra estas mujeres es tan fuerte que el 75% de las encuestadas dijo que ellas no mantendrían el contacto con una hija si supieran que se dedicaba a la prostitución.

La corrupción prospera donde hay una sociedad civil débil. En países de antigua influencia soviética, las organizaciones de mujeres y de ayuda social fueron suprimidas, pero no obstante, se han constituido ONGs locales para combatir el tráfico y la explotación de sus hermanas, hijas y amigas. Desafortunadamente, estas organizaciones son pobres y, en consecuencia, sus voces no se oyen.

Las agendas a favor de la prostitución deben detenerse. Las agencias gubernamentales necesitan una directiva clara para que ninguno de los fondos del país pueda utilizarse para defender la normalización y el tráfico internacional. Es necesario que esos fondos se concedan a quienes se oponen al tráfico y la explotación, y financiar a ONGs que se preocupen de verdad de las ciudadanas de su país y quieran trabajar para desarrollar una sociedad civil fuerte y sana que defienda la dignidad y el bienestar de las mujeres ■